



Raymundo Riva Palacio

■ Periodismo en conflicto

Hace varios meses, un alto funcionario llegó con el secretario Genaro García Luna con una propuesta increíble. Una periodista muy cercana a él le ofrecía sentarlo a negociar con Los Zetas. Por unos momentos estupefacto, García Luna transitó a la velocidad de la luz a la indignación y explotó. Que cómo, siendo funcionario en áreas de la seguridad, se le ocurría llevar semejante mensaje. Que cómo se atrevía a plantear ese tipo de cosas. Que la única forma que se acercaría a Los Zetas sería para detener a esos criminales. Y por cierto, le dijo García Luna al funcionario, de acuerdo con personas que conocen detalladamente el episodio, dile que se cuide, porque esos sí matan.

El episodio ilustra uno de los capítulos más silenciados en los medios, el de la relación de los narcotraficantes con los medios, donde hay una fuerte autocensura por un prurito de no hablar mal del propio gremio. Es curioso. Es el único donde no se realizan autocríticas y se callan muchas cosas, con lo cual se cae inevitablemente en la complicidad. El tema de la delincuencia organizada no es el único donde se da este pernicioso fenómeno, pero es uno de los más sobresalientes, dados los niveles de conflictividad en el país derivado de la guerra contra los cárteles de la droga, que tienen bajo amenaza permanente a muchos medios y periodistas en el país.

En los últimos días ha habido un debate en los medios derivado del protagonismo de Ramón Alberto Garza, director de la revista electrónica descargable Reporte Índigo, quien escribió hace dos viernes que varios periodistas habían servido de "tapete" a García Luna cuando lo entrevistaron a propósito de una información recalentada que difundió su revista sobre la nueva casa que está construyendo el secretario. A Garza pareció no gustarle, primero, que le dieran voz al funcionario, y segundo, que se expresaran despectivamente sobre el tipo de periodismo que acostumbra. El tema no es elitista y tiene una vena de interés público, pues Garza permitió que los límites del periodismo se rebasaran en su revista en la cobertura del narcotráfico, lo

que lo convierte en un estudio de caso a revisar.

Reporte Índigo suarió que el incidente en el cual murió el entonces secretario de Gobernación, Juan Camilo Mouriño, y el subprocurador José Luis Santiago Vasconcelos, quien vivía bajo amenazas de muerte de los cárteles de la droga, no había sido un accidente, sino que el avión explotó en el aire. Para ello entrevistó a una persona que se identificó como piloto de Magnicharter, que volaba detrás del Lear Jet de los funcionarios. En realidad, no había ningún Magnicharter en el radar de aterrizajes o despegues ese día en el aeropuerto, por lo que dijo esa persona era falso. Garza publicó, empero, que era la verdad detrás de la muerte de Mouriño.

Durante meses Garza usó al capitán Javier Herrera Valles como fuente primaria de sus "revelaciones" periodísticas, acusando a García Luna de persecución cuando la PGR lo detuvo por presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa, y en particular con los hermanos Bel-

trán Leyva. Herrera Valles no ha logrado ganar ninguna apelación, por lo que así como sigue en la cárcel, Reporte Índigo ha sufrido una baja sensible en la información interna de la Secretaría de Seguridad Pública. Otra fuente de la revista prefirió bajar su perfil cuando García Luna lo paró en seco cuando transmitió el mensaje sobre el ofrecimiento de negociar con Los Zetas. Una fuente adicional de Reporte Índigo en el ámbito militar, fue removido bruscamente de su cargo y se le está investigando por presunta relación



Fecha 13.04.2009	Sección Política	Página 34
----------------------------	----------------------------	---------------------

con el narcotráfico.

El caso Reporte Índigo es paradigmático en la cobertura de los asuntos relacionados con el narcotráfico. Dos de sus fuentes de información están siendo investigados por su presunto nexos con la delincuencia organizada y Garza se indigna porque, lejos de apoyar su cruzada, periodistas respetables están cuestionando sus métodos y procedimientos. Pero el gobierno, que tiene documentada la relación de una de las fuentes con

los hermanos Beltrán Leyva, no ha tocado a Garza ni con el pétalo de una crítica. En su caso, como en otros, está atrapado en su propio pasado.

El gobierno no puede actuar legalmente contra ningún periodista en parte porque no ha construido la legitimidad perdida con el paso de sexenios, y en parte porque todo aquello que tiene que ver con una acción en contra de un medio o periodista, sin importar el fondo que la inició, es visto como un atentado a la libertad de expresión. En esa

dialéctica, mucha impunidad campea, paradójicamente no en las zonas más calientes por la violencia contra el narcotráfico, sino en las ciudades donde siguen existiendo burbujas tangibles de protección para periodistas y medios.

Es injusto para decenas de periodistas y medios que diariamente se están jugando la vida, y no meramente jugando al periodismo. Y es una bofetada para quienes viven en la incertidumbre sobre si van a vivir toda la jornada que persista ese blindaje a quienes transgredieron los límites éticos y profesionales y se amparan en esa visión unidimensional, maniquea y chabacana que todavía permea, lamentablemente, en amplios sectores de la prensa más influyente en México. ☐

El caso Reporte Índigo es paradigmático en la cobertura de los asuntos relacionados con el narcotráfico

rriva@ejecentral.com.mx
www.ejecentral.com.mxtg